

## MEMORANDO

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2026

23002026E3009262

**PARA: LAURA CAMILA RAMOS DIAZ**

Jefe Oficina Asesora Jurídica

**DE: OSCAR FRANCISCO PUERTA LUCHINI**

Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico

**ASUNTO:** Respuesta solicitud de insumos, dentro de la petición (2026E1021737) de validación técnica respecto de concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá sobre el inmueble “El Manantial” con código catastral No. 154550000000000110284000000000.

Cordial Saludo,

En atención al memorando de la referencia, mediante el cual la Oficina Asesora Jurídica solicita a esta Dirección emitir insumo técnico para dar respuesta a la petición elevada por el ciudadano Julio Gustavo Olmos Gutiérrez, relacionada con la validación técnica del Concepto No. OTM-011-26 emitido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), nos permitimos remitir la siguiente respuesta en el marco exclusivo de las funciones y competencias del Ministerio, la cual no comprende la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares; la respuesta es general y no tiene carácter obligatorio ni vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. Además de encontrarse sujeta al análisis de la Oficina Asesora Jurídica en el marco de la atención a la petición elevada por el peticionario, en tanto el contenido de la respuesta final según las competencias de la Entidad.

Sea lo primero indicar que, este Ministerio es respetuoso de las competencias fijadas por la Ley a las diferentes entidades del Estado, en este sentido, de

acuerdo con la Constitución Política, la Ley 99 de 1993, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 3570 de 2011 y demás leyes, es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación.

En este sentido se han fijado para este Ministerio las siguientes funciones:

1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos.
3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas públicas, de competencia de los mismos, que tengan implicaciones de carácter ambiental y desarrollo sostenible. Y establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales.
4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos de cooperación, y representar al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y convenios internacionales sobre ambiente recursos naturales renovables y desarrollo sostenible."
5. Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico.
6. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos que, en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso de la República.

7. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
8. Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, tales como, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados; y fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad con la ley.
9. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente.
10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, y ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, y ordenar al organismo nacional competente para la expedición de licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar.
11. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente y los recursos naturales renovables y sobre modelos alternativos de desarrollo sostenible.
12. Establecer el Sistema de Información Ambiental, organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales; y administrar el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y sus subcuentas.
13. Diseñar y formular la política, planes, programas y proyectos, y establecer los criterios, directrices, orientaciones y lineamientos en materia de áreas protegidas, y formular la política en materia del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

14. Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento; y declarar y sustraer Distritos Nacionales de Manejo Integrado. Las corporaciones autónomas regionales en desarrollo de su competencia de administrar las reservas forestales nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, realizarán los estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos para los fines previstos en el presente numeral, con base en los lineamientos establecidos por este Ministerio.
15. Elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios con base en los cuales las autoridades ambientales declararán, reservarán, alinderarán, realinderarán, sustraerán, integrarán o recategorizarán, las reservas forestales regionales y para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales sin requerir la adopción de los mismos por parte del Ministerio.
16. Expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos.
17. Adquirir, en los casos expresamente definidos en la Ley 99 de 1993, los bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés social definidas por la ley, e imponer las servidumbres a que hubiese lugar.
18. Constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, asociaciones, fundaciones o entidades para la conservación, manejo, administración y gestión de la biodiversidad, promoción y comercialización de bienes y servicios ambientales, velando por la protección del patrimonio natural del país.
19. Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

Por otro lado, es oportuno mencionar que las Autoridades Ambientales: Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las creadas por el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el marco del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, son las entidades encargadas de ejecutar las políticas y normas ambientales fijadas por este Ministerio en el área de su jurisdicción, para lo cual cuentan con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y



personería jurídica que emana de la Constitución Nacional. Estas autoridades ambientales ejercen, entre otras, las siguientes funciones:

*"1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria el Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción;*

*2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; (...)*

*(...) 9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente (...)"*

En este sentido y en virtud a la pregunta que se relaciona, puede mencionarse que para la planificación, protección y uso sostenible de las aguas, incluidas las aguas subterráneas (contenidas en los acuíferos), este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como rector de la política ambiental en Colombia publicó en marzo de 2010, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH1 y reglamentó los diferentes instrumentos para la planificación de estos recursos2 de acuerdo con la zonificación hidrográfica e hidrogeológica del país, como se menciona a continuación:

- ✓ Planes Estratégicos de Macrocuena - PEM, en las 5 Áreas Hidrográficas del país.
- ✓ Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas Hidrográficas.
- ✓ Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA, en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente.
- ✓ Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas – PMAM en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsiguiente la Hidrográfica.

---

<sup>1</sup> <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Politica-nacional-Gestion-integral-de-recurso-Hidrico-web.pdf>

<sup>2</sup> Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015 Único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, Título 3, Capítulo 1 (artículos 2.2.3.1.1.1 al 2.2.3.1.13.1)

- ✓ Planes de Manejo Ambiental Acuíferos – PMAA – en acuíferos priorizados.

Dentro de estos, se resaltan los siguientes que tienen una relación más directa con los acuíferos;

Los **Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA**, son el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, en el que participa la población que habita en el territorio de la cuenca, conducente al buen uso y manejo de tales recursos, el cual tiene como principales alcances:

- ✓ Estudios de línea base (Diagnóstico) a escala 1:25.000 que soportan el ordenamiento ambiental de la cuenca y que deben ser tenidos en cuenta en otros ordenamientos del territorio.
- ✓ Ordenación y manejo de la cuenca de manera participativa buscando establecer consensos en la zonificación ambiental que conduzcan a: a) la protección, conservación, uso y aprovechamiento

Adicionalmente, el Ministerio expidió la **Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas** (en actualización), la cual fue adoptada mediante la Resolución 1907 de 2013, con el propósito de orientar a las Autoridades Ambientales a partir de unos parámetros mínimos, en el proceso de elaboración y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA.

La citada Guía suministra directrices y orientaciones metodológicas a considerar en el proceso de ordenación de cuencas por parte de las Autoridades Ambientales, a través, de la descripción técnica y procedimental de las diferentes fases requeridas para la actualización o formulación del Plan de Ordenación y Manejo - POMCA, así mismo, establece las orientaciones para la coordinación y articulación institucional en las cuencas compartidas.

De esta manera nos permitimos presentar las siguientes consideraciones técnicas y normativas, estructuradas conforme a los interrogantes planteados por el peticionario.

- 1. Se sirva realizar una revisión de suficiencia técnica y legal del Concepto Técnico OTM-011-26 del 25 de marzo de 2026, emitido por Corpoboyacá.*

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el ente rector de la política ambiental nacional. Sin embargo, las Corporaciones Autónomas Regionales, como Corpoboyacá, gozan de autonomía administrativa y financiera, y son la máxima autoridad ambiental en su jurisdicción. Por lo tanto, el Ministerio emite lineamientos y políticas nacionales, pero no actúa como una instancia de revisión jerárquica o de apelación sobre los conceptos técnicos específicos emitidos por las autoridades ambientales en el marco de sus competencias, salvo en los casos expresamente señalados por la ley.

2. *Validar, en relación con la categorización hídrica, si los criterios utilizados para definir un "rezume o afloramiento por flujo subsuperficial" son acordes con la normativa ambiental nacional vigente, y si las medidas de manejo propuestas corresponden a las exigidas por la política nacional.*

El concepto de Corpoboyacá clasifica la manifestación hídrica en las coordenadas (Lat: 5°10'55.08", Lon: 73°10'17.74") como un "rezume o afloramiento por flujo subsuperficial", descartando que se trate de un nacimiento tipo manantial u ojo de agua, argumentando que el agua emerge de manera dispersa y no desde un punto único definido.

A nivel nacional, el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente) y la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico establecen la protección de las aguas subterráneas y sus zonas de recarga y afloramiento. Si bien el término "rezume" es una descripción hidrológica válida para referirse a descargas difusas de aguas subterráneas (flujo base), la normativa ambiental colombiana (Art. 2.2.3.2.3A.2 del Decreto 1076 de 2015) protege de manera integral los "nacimientos", consideración que está a cargo de la evaluación desarrollada por el equipo técnico de la Corporación encargado de desarrollar la visita asociada a la procedencia del agua que se encuentra expuesta en superficie, y en virtud de ello, ejercer las medidas de protección anteriormente expuestas.

3. *Confirmar, en términos de seguridad jurídica, si los permisos condicionados (ocupación de cauce y aprovechamiento forestal) agotan los requisitos ambientales necesarios para este tipo de intervenciones, asegurando que no existan omisiones técnicas que puedan derivar en afectaciones al medioambiente.*

Para la apertura de una vía carretable que interviene cuerpos de agua y cobertura vegetal, los permisos de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos (Art.



2.2.3.2.12.1, Decreto 1076 de 2015) y de Aprovechamiento Forestal (Art. 2.2.1.1.9, Decreto 1076 de 2015) son los instrumentos de control y manejo ambiental exigibles a nivel nacional.

No obstante, la suficiencia de estos permisos depende de la evaluación detallada que realice la autoridad ambiental regional al momento de su trámite. Es en el marco de la evaluación de dichos permisos donde Corpoboyacá deberá determinar la necesidad de la exigencia de los diseños hidráulicos, estructurales y las medidas de compensación que permitan garantizar que la intervención no alterará la dinámica hidrológica de la microcuenca, ni afectará la zona de humedal identificada a 10 metros del trazado, según se manifiesta en el escrito de la petición.

Adicionalmente, si la apertura de la vía implica movimiento de tierras que pueda generar vertimientos o arrastre de sedimentos hacia las fuentes hídricas, la Corporación deberá evaluar la necesidad de exigir medidas de manejo de escorrentías o, de ser el caso, permisos de vertimientos.

*4. Validar si la faja de protección de cinco (5) metros establecida para fuentes hídricas no nominadas se ajusta a los estándares mínimos de protección de microcuencas a nivel nacional.*

Para el presente caso, es importante mencionar que en materia protección de cuerpos de agua, se ha definido el acotamiento de la ronda hídrica, el cual se encuentra regulado por el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el Decreto 2245 de 2017 (hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015) y la Resolución 957 de 2018 así como las dos circulares aclaratorias que se relacionan a continuación

1. Circular MIN-8000-2-01322 de 2 de abril de 2020, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual tiene como asunto: dar claridad con respecto al tratamiento al acotamiento de la ronda hídrica.

2. Circular MADS-8230-004 de 14 de julio de 2020, suscrita por parte la Dirección General Marítima y el Centro de Investigaciones oceanográficas e Hidrográficas y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, se presenta el Protocolo para el flujo de información entre entidades del estado para el acotamiento de las rondas hídricas para cuerpos de agua influenciados por la dinámica marina.



De acuerdo a lo anterior vale la pena recordar que la Ley 1450 de 2011, en su artículo 206, establece que: ***"(...) corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional"***.

En este sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2245 de 2017: "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas", que incluyó definiciones adicionales y reglamentó los criterios mencionados en la Ley 1450 de 2011. El citado Decreto adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con las rondas hídricas, en donde éstas se definen así:

***"Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" (numeral 4 del artículo 2.2.3.2.3A.2., del Decreto 1076 de 2015, adicionado por medio del Decreto 2245 de 2017).***

Adicionalmente, en el artículo 2.2.3.2.3A.4 del mismo Decreto, se indica que las autoridades ambientales competentes deberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en su jurisdicción, teniendo en cuenta lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia". Posteriormente, mediante la resolución 957 del 31 de mayo de 2018 se adoptó dicho documento.

Además este documento establece los criterios para orientar a las Autoridades ambientales en el proceso de: 1) Definir el orden prioridades para el inicio del

acotamiento de las rondas hídricas en su jurisdicción, 2) Definir el límite físico de las rondas hídricas desde un enfoque funcional; y, 3) Establecer directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas.

A través del siguiente enlace podrá descargar la guía de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas:

<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/18.-Anexo-18-Guia-Criterios-para-el-acotamiento-de-las-Rondas-Hidricas-1.pdf>

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es oportuno señalar lo siguiente:

- El acotamiento de la ronda hídrica tiene como principio rector el mantenimiento o recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos. Es esta funcionalidad la que condiciona el desarrollo de actividades en estos espacios geográficos, bajo el entendido de que el acotamiento de las rondas hídricas permite identificar aquellas zonas ocupadas por el flujo de agua y sedimentos de los cuerpos de agua, las cuales por su naturaleza pueden generar condiciones de riesgo para las personas e infraestructura localizadas en las zonas de ribera.
- **La ronda hídrica se constituye una norma de superior jerarquía y determinante ambiental para el ordenamiento territorial**, cuyo acotamiento es competencia de la autoridad ambiental. Es importante mencionar que el acotamiento de la ronda hídrica tiene un efecto directo en el ordenamiento territorial ya que es un determinante ambiental con una reglamentación específica, por tanto, es al municipio a quien le compete reglamentar el uso del suelo (artículo 313 de la Constitución Política) acorde con los atributos del determinante ambiental definidos por la respectiva autoridad ambiental.
- La ronda hídrica comprende dos elementos constituyentes: **el primero** es el área que corresponde a la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho (a la cual se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto – Ley 2811 de 1974), y **el segundo** es el área de protección o conservación aferente.

Por su parte, para el segundo elemento la autoridad ambiental deberá definir las **estrategias de manejo ambiental a que haya lugar para el logro del objeto de conservación definido**. Los condicionamientos para este elemento dependerán de los atributos de funcionalidad de los tres criterios que dan el soporte para la delimitación física de la ronda hídrica y, en general, los condicionamientos serán menos restrictivos que el primer elemento (faja paralela), por lo que la estrategia de manejo podrá estar asociada con usos sostenibles.

En este sentido la ronda hídrica como figura de protección del recurso hídrico, incluyendo sus dos elementos constituyentes (**la faja paralela hasta de treinta (30) metros de ancho y el área de protección o conservación aferente**), aplica para todos los cuerpos de agua naturales del país, ya sea que se localicen en zonas urbanas y/o rurales. Al respecto se aclara que el primer elemento constituyente de la ronda hídrica, que corresponde a la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, tiene un ancho de hasta treinta (30) metros, es decir, el ancho de esta franja puede variar entre 0.1 y 30 metros.

- La ronda hídrica aplica para **cuerpos de agua de tipo natural con corrientes de agua de tipo permanente o intermitente siempre y cuando este último presente evidencias geomorfológicas asociadas a un cauce**. Así como para cuerpos de agua de tipo lénticos y nacimientos de agua y/o manantiales.
- Una vez definido el límite físico de la ronda hídrica se establecerán las directrices de manejo que sean compatibles con la funcionalidad de ésta, a partir de los resultados del análisis que soporta su delimitación física. Para tal fin, la Guía establece directrices y estrategias para el manejo ambiental que orientan los futuros procesos de ordenamiento ambiental del territorio. (Ver numeral 6.2.5. Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas de la guía de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas).

Adicionalmente vale la pena resaltar la competencia de los entes territoriales (municipios, áreas metropolitanas y distritos):

El ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales se sujeta a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993.

Por otro lado, la Ley 99 de 1993, a través del artículo 65, define entre otras las funciones de los municipios en materia ambiental, entre las cuales se tiene:

*"8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo."*

En lo referente a la ronda hídrica se reitera lo mencionado frente a la aplicación de los lineamientos expedidos en el 2018 en donde a través de la Resolución 957 de 2018, este Ministerio orientó entre otros, criterios de priorización para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua naturales ubicados en la jurisdicción de las autoridades ambientales, entre ellos, el que se cita en el grupo que se encuentran relacionados con instrumentos de gestión ambiental, numeral 4.1.1.1.1., *que trata de Cuerpos de agua con procesos en curso o actos administrativos de la Autoridad Ambiental competente relacionados con la gestión de áreas que puedan ser coincidentes con las de la ronda hídrica*, *que se estableció con el fin "(...) de armonizar las disposiciones definidas en la Guía con otras antecedentes relacionadas con la gestión de áreas que puedan ser coincidentes con las de la ronda hídrica (...)"*, y con base en ello, *"(...) la autoridad ambiental competente realizará el respectivo análisis que les permita tomar las decisiones a que haya lugar y puntuar con este criterio para su priorización."*; y si tomar las decisiones que haya lugar frente al desarrollo de la determinante ambiental.

Ahora bien, es preciso indicar que el criterio técnico para la definición del primer elemento **faja paralela**, es el hidrológico, el cual consiste en identificar los eventos de crecidas e inundaciones que se transportan por los cauces y se almacenan temporalmente en la ribera, así como la escorrentía superficial con el agua, sedimentos y nutrientes que se producen en la cuenca hidrográfica. Se fundamenta en la representación espacial de las áreas inundables durante eventos de La Niña "normales" a los que se ha asociado una recurrencia de 15 años en promedio (ver numeral 6.1.2.1.1. de la guía técnica), o de eventos de 100 años de período de retorno para los casos mencionados en el numeral 6.1.2.1.2 de la guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas. En los casos en que el componente hidrológico comprenda una extensión mayor a 30

metros, a partir del cauce permanente o de la línea de mareas máximas, "la faja paralela" será igual a 30 metros y la extensión restante formará parte del "área de protección o conservación aferente" junto con los otros dos componentes

Una vez realizadas estas precisiones, se procede a dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:

En relación a (...) *si la faja de protección de cinco (5) metros establecida para fuentes hídricas no nominadas se ajusta a los estándares mínimos de protección (...)*, tal como se ha mencionado, en el marco de las disposiciones ambientales expedidas, la orientación está dada a que las autoridades ambientales definan las figuras de protección o medidas de manejo ambiental conforme en línea con las políticas ambientales fijadas a nivel nacional. En este orden de ideas, los condicionamientos que defina la autoridad ambiental frente a cualquier figura de protección de los recursos naturales renovables son de su autonomía jurídica y administrativa, las cuales deben tener definidos los alcances técnicos, administrativos y jurídicos que la soportan, en concordancia con el marco normativo aplicable.

Cordialmente,



**ÓSCAR FRANCISCO PUERTA LUCHINI**

Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico

Elaboró: Luis David Mesa - Contratista DGIRH

Viviana Carolina Díaz Garnica Contratista DGIRH

Valentina Giraldo Castaño - Contratista DGIRH

Revisó: Elvia Johanna Gelvez Bernal- Profesional Especializado DGIRH

Óscar Francisco Puerta Luchini - Director DGIRH

Fecha: 07/05/2026